

# NEW LEFT REVIEW 120

SEGUNDA ÉPOCA

ENERO - FEBRERO 2020

## ARTÍCULOS

JUAN CARLOS MONEDERO	Francotiradores en la cocina	7
CARLO GINZBURG	El vínculo de la vergüenza	39
NICHOLAS MULDER	Homo Europus	49
MICHEL HARD & ANTONIO NEGRI	<i>Imperio</i> , veinte años después	71

## MOVIMIENTO

ROHANA KUDDUS	Indonesia, sorpresa en septiembre	99
ZION LIGHTS	Rebeldes contra el cambio climático	113

## ARTÍCULOS

AARON BENANAV	Automatización, segunda parte	125
---------------	-------------------------------	-----

## CRÍTICA

OWEN HEATHERLEY	Una utopía de adobe	159
EMMA FAJGENBAUM	La despedida de Akerman	168
OLIVER EAGLETON	¿Grilletes forjados por la mente?	173

---

[WWW.NEWLEFTREVIEW.ES](http://WWW.NEWLEFTREVIEW.ES)

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

INSTITUTO  
**25M**  
DEMOCRACIA

**ts**  
d traficantes de sueños

---

[SUSCRÍBETE](#)

ROHANNA KUDDUS

## SORPRESA EN SEPTIEMBRE

### *La insurrección en Indonesia*

**D**URANTE LA ÚLTIMA semana de septiembre de 2019, la complacencia del *establishment* indonesio se vio sacudida por una ola de protestas masivas que estallaron por todo el país, en Java, Sumatra, Sulawesi, Bali, Papúa y otros lugares. Bajo el lema *Reformasi Dikorupsi*, o «Reforma corrupta» (en referencia al Movimiento Reformasi que derrocó a Suharto en 1998), a los estudiantes universitarios, muchos de ellos ataviados con las chaquetas de sus universidades, se les unieron activistas de todo tipo, obreros, sindicalistas, campesinos, granjeros, pescadores y estudiantes de secundaria, especialmente de escuelas de formación profesional, generalmente de clase obrera baja, estereotipados como alborotadores violentos y pandilleros, de esos a quienes la policía suele hacer pasar un mal rato. Las protestas comenzaron como manifestaciones pacíficas frente a los edificios del Parlamento nacional y del Parlamento de las Regiones, con discursos y llamamientos a los diputados para que salieran al encuentro de los allí convocados. Pero una vez fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos, cañones de agua y porras, los manifestantes reaccionaron a menudo, aunque no siempre, violentamente, mientras los estudiantes de las mencionadas escuelas de formación profesional aportaban fuerza colectiva y experiencia táctica para contrarrestar los ataques de la policía.

A principios de octubre el movimiento había decaído. Con un coste – si dejamos al margen las víctimas de las revueltas en Papúa– de cinco muertos y doscientos sesenta y cinco heridos, es posible que no haya sido, como se ha dicho más de una vez en los medios de comunicación, la mayor protesta en Indonesia desde el derrocamiento de Suharto en

1998; es posible que tanto las manifestaciones de 2016 contra el alcalde cristiano de Yakarta como las de mayo de 2019 contra el resultado de las elecciones presidenciales, en las que, según se informó, ocho personas murieron y setecientas resultaron heridas, fueran más concurridas. Sin embargo, aquellas fueron movilizaciones de un marcado cariz partidista; orquestadas por fuerzas de la derecha religiosa y política dentro del colosario *establishment* político del país, fueron rápidamente absorbidas y no supusieron una amenaza significativa para el mismo. En cambio, las explosiones de ira popular que se produjeron por toda Indonesia en septiembre de 2019 no se organizaron de acuerdo con esas líneas. No fueron producto de las maniobras de ningún partido o interés sectario en la constelación oligárquica que ha gobernado el país desde la caída de Suharto y sus demandas fueron inequívocamente progresistas.

El detonante del movimiento fue el paquete de medidas abiertamente regresivas que fue aprobado a toda velocidad en el Parlamento nacional justo antes de que terminara su mandato el 30 de septiembre de 2019, conforme a una estrategia que suelen adoptar los gobiernos cuando aprovechan el final de una legislatura para aprobar leyes sin restricciones y con un tiempo limitado para su deliberación o revisión, calculando que el gobierno que venga después asumirá las consecuencias. Las dos medidas más controvertidas del paquete consistían en una revisión del Código Penal y una neutralización de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK). La legislación relativa a la tierra, el trabajo, la minería, la política penitenciaria, la seguridad cibernética y la defensa contenía otras afrentas. Con el acento puesto en las revisiones del Código Penal y de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, una alianza dispersa de activistas articuló un conjunto más amplio de demandas y, dándose cuenta del papel estratégico que los estudiantes podían desempeñar en la movilización de la protesta, las proyectó a través de estos últimos. Las demandas se tradujeron en:

1. Rechazo del Código Penal revisado, del proyecto de ley de minería, del proyecto de ley de tierras, del proyecto de ley de procedimiento correccional y del proyecto de ley laboral. Revocación de la Ley de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y de la Ley de Recursos naturales. Aprobación de la Ley de Protección contra la Violencia Sexual y de la Ley de Protección de los Trabajadores Domésticos.
2. Anulación de los nombramientos realizados por el Parlamento para neutralizar la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.

3. Prohibición de que militares y policías ocupen puestos civiles.
4. Fin de la represión en Papúa y en otros lugares, y liberación inmediata de los presos políticos papúes.
5. Fin de la criminalización de los activistas.
6. Fin de los incendios forestales provocados por las empresas y que se revoquen sus permisos y concesiones.
7. Resolución de los casos de violaciones de los derechos humanos y juicio de los criminales responsables de las mismas.

En tanto que acto legislativo integralmente reaccionario, el Código Penal revisado tiene pocos equivalentes en el mundo, a excepción tal vez del vigente en Arabia Saudita. Castiga las relaciones sexuales extramatrimoniales con un año de prisión y con seis meses la cohabitación sin matrimonio; niega a las mujeres el derecho al aborto; prohíbe cualquier exposición o debate sobre medios anticonceptivos por parte de personas no autorizadas, incluyendo a los padres; amplía las prohibiciones existentes de blasfemia, que se castiga con cinco años de prisión; penaliza los insultos –definidos de manera imprecisa– al gobierno (incluyendo al presidente, vicepresidente, diputados y autoridades regionales) y los símbolos del Estado (banderas, himnos, etcétera); castiga toda enseñanza del marxismo-leninismo con cuatro años de cárcel y la constitución de cualquier organización marxista-leninista con diez años. Conviene recordar que ni siquiera bajo Suharto llegaron a prohibirse las relaciones sexuales extramatrimoniales ni la cohabitación, y que en treinta y tres años fueron procesadas por blasfemia diez personas, mientras que en las dos décadas siguientes esa cifra se multiplicó por más de diez. Por su parte, la proscripción del marxismo-leninismo no llegó en aquel entonces a incluirse en el Código Penal.

A la indignación por la oscurantista represión moral y política codificada por las nuevas disposiciones legislativas –una indignación que entre los estudiantes y los jóvenes era generalizada– se sumó la ira de la población de todas las edades ante el intento deliberado de neutralizar la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Creada en un principio durante el gobierno de Megawati para frustrar la investigación de las fortunas irregulares de su propia familia, con el tiempo la Comisión para la Erradicación de la Corrupción terminó por escapar al control de los partidos (se dotó de poderes que le permitieron perseguir incluso

a figuras del *establishment* tan altas como un veterano miembro del Banco Central y un general de policía, aunque, naturalmente, la malversación del presidente y de sus familiares siempre estuvo fuera de su alcance), llegando a amenazar los intereses de la elite. Los intentos de cortarle las alas comenzaron ya en 2010 bajo el Gobierno del sucesor de Megawati, Yudhoyono, y han continuado desde entonces. Todos los partidos políticos que actualmente presionan por su neutralización tienen al menos un cuadro que está siendo juzgado o ha sido condenado en un caso de corrupción a cargo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. La Comisión sigue gozando de una amplia estima entre la opinión pública, especialmente después de que en 2017 se produjera un ataque con ácido clorhídrico contra su investigador principal, Novel Baswedan, a cuyo autor el equipo conjunto de investigación creado por el jefe de la policía nacional nombrado por el actual presidente del país Jokowi Widodo, Tito Karnavian, no llegó nunca a identificar. A mediados de octubre, un vídeo filtrado mostró la destrucción de páginas de un cuaderno rojo perteneciente a un empresario acusado de sobornar a legisladores (unas páginas que se sospechaba podrían contener el nombre de Tito cuando, desde la jefatura de la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo y desde otros cargos, controlaba fondos por un total de 600 millones de dólares). La perspectiva de un encubrimiento de robo de dinero público a gran escala despertó una intensa indignación<sup>1</sup>.

Otro aspecto importante de las protestas fue la solidaridad con la reacción papúa al trato racista en Indonesia. En el aniversario del acuerdo firmado en Nueva York por el que Estados Unidos presionó a los Países Bajos para que entregaran su colonia en Nueva Guinea Occidental a Yakarta, por las mismas razones que aseguró que Yakarta podría tomar Timor Oriental con impunidad trece años después, es decir, para fortalecer el nacionalismo anticomunista en Indonesia, los papúes se manifestaron pacíficamente por toda la isla de Java. Al día siguiente, el 16 de agosto de 2019, varios estudiantes papúes de Surabaya fueron atacados por patrullas derechistas, que alegaban que habían ultrajado una bandera indonesia el día de la Independencia, mientras les insultaban llamándoles «monos», «perros» y «cerdos», y su residencia era asaltada por policías antidisturbios con gases lacrimógenos; cuarenta y

---

<sup>1</sup> Incluso *The Economist*, un antiguo defensor del régimen de Suharto, que nunca pestañeó ante sus exterminios, se sintió impelido a expresar su consternación, preguntando lúcidamente: «¿Dónde está el reformista recién reelegido como presidente de Indonesia?», véase «No Jokowi», 28 de septiembre de 2019.

tres estudiantes fueron arrestados. En respuesta a estos hechos, miles de personas salieron a las calles de Papúa e incendiaron vehículos y edificios, entre otros el del Parlamento local. El Gobierno clausuró Internet, cerró las escuelas, desplegó miles de efectivos de seguridad y un número indeterminado de miembros de la milicia, mientras muchos huyeron de la isla. A fecha de 1 de noviembre de 2019 aproximadamente treinta y siete personas han sido asesinadas, y posiblemente haya más muertes no reportadas.

### *Contexto político*

El trasfondo más amplio de la insurrección del pasado mes de septiembre se encuentra en el rumbo que ha tomado el sistema político indonesio desde la salida del poder de Suharto, marcado por la falta de una ruptura ideológica o institucional decisiva con el «Nuevo Orden» y el cierre de filas por parte de la elite en torno a una estructura oligárquica que, si bien conserva su maquinaria represiva (el ejército y la policía) opera en un sistema electoral gestionado por los medios de comunicación en el que intereses económicos rivales se pelean, más que por diferencias políticas, por el botín aparejado a los cargos públicos. En 2014 la elección como presidente de Jokowi Widodo, por su origen ajeno a la oligarquía, que prometía no solo desarrollo económico y protección del medio ambiente, sino también un gobierno limpio y una agenda de derechos humanos, despertó esperanzas de cambio. Estas, sin embargo, pronto se vieron frustradas. En 2016 era ya patente que Jokowi no tenía interés alguno en abordar la masacre sobre la que Suharto había construido su régimen, y que su objetivo no era otro que consolidar su propio poder dando cabida a las afianzadas elites políticas y empresariales del país<sup>2</sup>. Tras obtener la reelección en 2019, su discurso de investidura obvió toda mención a los derechos humanos para destacar en cambio el desarrollo de las infraestructuras, los incentivos a los inversores, las mejoras burocráticas y las reformas en materia de bienestar social. Bajo su lema característico de *kerja, kerja, kerja* («trabajo, trabajo, trabajo») cultivaba la imagen del gobernante austero siempre dispuesto a arremangarse y hacer cosas concretas, sin dejarse distraer por las contiendas políticas. En la práctica, sin embargo, evitó las arenas movedizas de la reforma burocrática, al tiempo que trasladaba el grueso de las labores de infraestructura, atención sanitaria y servicios educativos a empresas públicas

---

<sup>2</sup> Sobre el panorama político de la época y su trasfondo histórico véase mi análisis en «Los fantasmas de 1965», *NLR* 104, mayo-junio de 2017, pp. 51-102.

y agencias corporativas. Este planteamiento restrictivo del desarrollo económico se ha aplicado a expensas del medio ambiente, ya que los ambiciosos proyectos de centrales eléctricas dependen en gran medida de la industria del carbón, y de los derechos civiles, hasta el punto de que las protestas contra la expropiación forzosa de tierras para varios planes de infraestructura han sido noticia en repetidas ocasiones (y una importante huelga potencial se cierne sobre el aeropuerto internacional de Nueva Yogyakarta). Los resultados han sido precarios: un crecimiento anémico, cuyos beneficios han ido a parar en su mayor parte a las clases media y alta; unos programas de bienestar dirigidos por empresas estatales, pero que están distribuidos de forma desigual y pierden dinero; un desempleo que baja según las estadísticas, pero que enmascara un subempleo en aumento; y una corrupción que es endémica.

En términos institucionales, Jokowi comenzó su presidencia en 2014 con el respaldo de cuatro partidos que controlaban doscientos ocho de los quinientos sesenta escaños del Parlamento nacional, aunque a menudo estos estaban más interesados en vigilar a Jokowi y extraer de él contraprestaciones que en apoyarlo de manera efectiva. En el espacio de dos años, para darse a sí mismo más margen para implementar sus programas prioritarios sin demasiadas resistencias, tanto de la oposición como de su propia coalición, Jokowi cooptó la principal creación de Suharto, Golkar, más dos partidos más pequeños, lo que le dio una mayoría de trescientos ochenta y seis escaños. Por regla general, los partidos de la oposición son atraídos al gobierno mediante lucrativas ofertas de puestos en el gabinete o en empresas públicas, beneficios personales y oportunidades de patrocinio. La novedad del régimen de Jokowi, que se aparta de los métodos tradicionales del «presidencialismo de coalición», ha sido su interferencia ejecutiva en los asuntos internos de los partidos así atraídos. Jokowi encerró a Golkar y a otros en su gobierno, más que por el método habitual de ofrecer recompensas y reparto de poder, utilizando su autoridad presidencial para reconocer o rechazar la legalidad de los comités de dirección de los partidos, retirando el reconocimiento a las facciones opositoras y transfiriéndoselo a quienes estaban dispuestos a maniobrar más cerca de él.

Al tiempo que consolidaba su base parlamentaria en la maquinaria representativa del Estado, lejos de poner coto a sus aparatos represivos Jokowi los incorporó a su fórmula de poder, pero dándoles un giro propio. Si Suharto había gobernado a través de su mando sobre el ejército y

las ABRI (las fuerzas armadas, que abarcan también la marina, los marines y la fuerza aérea), Jokowi se ha apoyado en mucha mayor medida en la policía, que ha ido acumulando más y más poder bajo su mandato, ocupando posiciones clave en el aparato de inteligencia, la oficina de logística y ahora incluso –una de las grandes quejas de los manifestantes– en la cúpula de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, un órgano con el que la policía venía manteniendo un largo historial de conflictos. El ejército no ha visto con buenos ojos este ascenso de un rival de larga data que considera que invade su ámbito competencial y le resta oportunidades para la extracción de rentas, de modo que la competencia por el botín entre estas dos fuerzas continúa siendo intensa. Lo mismo sucede dentro de la gama de partidos, entre los que crece el número de «zonas grises» donde se solapan y cuya división de funciones es aún más difusa.

En estas condiciones, las diferencias políticas dentro del sistema, que en algún momento de 2014 parecía que podían adquirir algo más de entidad, han ido disminuyendo de manera constante. Tras las elecciones presidenciales de 2019 no ha quedado más que la religión como única variable significativa para distinguir a Jokowi de su rival, el arrogante exgeneral del ejército Prabowo Subianto, sinónimo de represión militar, yerno de Suharto y hermano de un empresario multimillonario. El gran disgusto para Jokowi durante su primer mandato había llegado con la campaña de masas de las organizaciones islamistas para pedir la destitución y el encarcelamiento de Ahok, el alcalde cristiano de Yakarta, con cargos fabricados de blasfemia contra el Corán. Ahok era un protegido de Jokowi, pero este, ante el alcance que había adquirido la protesta contra él, no tuvo ningún reparo en ponerlo entre rejas, mientras que Prabowo, igualmente impresionado por el éxito del alboroto, vio la oportunidad de llegar al poder si el sentir musulmán conservador, que ya lo había favorecido en 2014, se movilizaba más amplia y fervientemente. Para evitar este peligro, Jokowi eligió como candidato a la vicepresidencia a Maruf Amin, uno de los clérigos que, precisamente, habían encabezado la persecución contra Ahok. Este descarado cinismo dio sus frutos. Jokowi aumentó su ventaja del 6 al 11 por 100, pero también exacerbó la polarización religiosa y geocultural. En 2014 existía ya una brecha entre los musulmanes javaneses y las zonas no musulmanas como Bali, por un lado, donde Jokowi era más popular, y los musulmanes de las Islas Exteriores y Java Occidental, que apoyaban a Prabowo. En 2019 esta división se hizo aún más pronunciada, registrándose un mayor porcentaje de votos para Jokowi en las zonas javanesas



musulmanas y no musulmanas, y Prabowo mejorando sus resultados en las Islas Exteriores y Java Occidental, ya que Jokowi perdió Sulawesi del Sur sin el exvicepresidente Jusuf Kalla como compañero de candidatura. La religión parece ser ahora la única línea divisoria políticamente significativa en el país, si bien haría falta hacer al respecto un análisis socioeconómico más cuidadoso, ya que es posible que los pobres sin tierra de Java se hayan beneficiado de la educación y las prestaciones de salud ampliadas de Jokowi en mayor medida que los pobres de fuera de Java, donde la economía está más basada en las plantaciones de pequeños propietarios y en la minería<sup>3</sup>.

### *La respuesta de Jokowi*

Tal era el escenario cuando, después de las elecciones del pasado abril, estallaron las protestas. ¿Cuál fue la reacción de Jokowi? Mientras amenazaba con castigar a los estudiantes que se manifestaban, pidió al Parlamento nacional que aplazara la ratificación del Código Penal, así como los proyectos de ley sobre minería, régimen penitenciario y tierras. Se negó, sin embargo, a anular o modificar la Ley de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, y su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Yasonna Laoly, defensora de la actual revisión del Código Penal, conminó a los estudiantes a que la llevaran al Tribunal Constitucional para su revisión judicial, en lugar de protestar contra ella. En cuanto a Papúa, Jokowi optó por hacer allí la primera visita de su segundo mandato, e invitó a diversos clientes del gobierno, con exclusión de los manifestantes, a discutir la reconciliación bajo la atroz rúbrica: «Está bien ser emotivo. Pero es mejor perdonar». Mejor aún, para el Estado indonesio, es golpear con puño de hierro. A fecha de 14 de noviembre de 2019 las fuerzas de seguridad no han sido retiradas de Papúa, donde todavía permanecen estacionados en torno a siete mil efectivos de las brigadas móviles a la espera de recibir instrucciones adicionales del jefe de la policía nacional para sofocar cualquier conmemoración de la declaración de la Independencia de Papúa Occidental el 1 de diciembre, que el año pasado fue aplastada por los matones en Surabaya. Acompañada de planes de trocear Papúa en unidades más pequeñas, la «reconciliación» es una oferta a punta de pistola. La parálisis, las evasivas y la represión han servido una vez más de receta ante la crisis.

---

<sup>3</sup> Para más detalles, véase Ulla Fionna y Francis Hutchinson, «Indonesia's 2019 Elections: A fractured Democracy?», *Asian Affairs*, vol. 50, núm. 4, 2019, pp. 502-519.

Es posible que los parámetros de la política hayan cambiado, pero Jokowi no se ha dejado impresionar por ello. Por si hubiera alguna duda al respecto, en octubre anunció un nuevo gabinete con Prabowo, nada menos, que como ministro de Defensa, cuyo partido Gerindra quedaba integrado en la coalición de gobierno. Junto a Prabowo, Tito Karnavian (un aliado cercano al presidente, antiguo jefe de la policía regional de Papúa Occidental y posteriormente jefe de la policía nacional) pasó a ser ministro del Interior; Fachrul Razi, un exgeneral del ejército (y actualmente miembro del consejo directivo de varias empresas) que participó en el equipo de campaña de Jokowi, fue nombrado ministro de Religión; Nadiem Makarim, director general de Go-jek (una empresa de motocicletas compartidas que se ha expandido rápidamente en el sector de la entrega de alimentos a domicilio, pagos electrónicos, etcétera –una especie de híbrido entre Uber y AliPay–, con una valoración de 10.000 millones de dólares), ministro de Educación; Erick Thohir, el magnate de los medios de comunicación que dirigió el equipo de campaña de Jokowi en 2019 y cuyo hermano –un potentado de la industria del carbón– figura con frecuencia entre los hombres más ricos del país, ministro a cargo de las Empresas Públicas. Es difícil imaginar un conglomerado oligárquico más incestuoso, encabezado por el abrazo surrealista de los mismísimos Jokowi y Prabowo.

En 2014, cuando Jokowi fue elegido por primera vez, había muchas promesas y esperanzas puestas en que su gabinete sería «limpio», que no habría compraventa de puestos en su seno y que su coalición sería liviana. Desde entonces, sin embargo, su coalición ha pasado de tener doscientos ocho escaños a tener cuatrocientos veintisiete, con una mayoría parlamentaria de casi el 75 por 100. Por otro lado, los puestos en el gabinete nunca se han negociado de manera tan promiscua, expresando los partidos abiertamente su descontento por la cuota concedida. Se ha abandonado cualquier pretensión de evitar las prácticas tradicionales. En el congreso de su partido, Megawati emitió la orden explícita de que «el PDIP debe entrar en el gabinete con el mayor número posible de ministros», mientras que el movimiento islámico Nahdlatul Ulama (NU), al que pertenece Maruf Amin, se quejó de que conseguir la vicepresidencia era insuficiente como dividendo por lo que exigía un complemento en forma de ministros. En el propio Parlamento nacional, el partido de Prabowo, Gerindra –anteriormente la principal oposición al gobierno–, ha desplazado ahora a Golkar como segundo partido más importante de la coalición, habiendo estado su entrada precedida por un muy publicitado «safari» para conocer

a sus futuros socios. Para Jokowi, atraer a Prabowo y a su partido Gerindra a su campo sirve para reducir la oposición a su régimen, al desinflar a las fuerzas islámicas conservadoras que se habían unido a ellos. Estos islamistas, muchos de los cuales procedían de la movilización de 2016 contra Ahok, se distanciaron de los partidos políticos existentes y formaron una coalición llamada 212 Antiguos Alumnos (2 de diciembre de 2016), compuesta por el Frente de Defensores Islámicos (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) e incluso muchos del NU, entre otros. Tras la cooptación de Gerindra, la oposición parlamentaria se redujo a solo dos partidos islamistas, el PKS y el PAN afiliado a la organización islámica Muhammadiyah, más el vehículo «no alineado» de Yudhoyono, Demokrat, y es probable que se reduzca aún más. El PAN (al igual que Demokrat, un actor tradicionalmente equidistante al que solo estorba el rencor de larga data de Megawati contra Yudhoyono) se ha cambiado de bando en múltiples ocasiones: se sumó a la coalición gobernante en 2015, apoyó luego a Prabowo a mediados de 2018 y ahora se rumorea que está esperando entrar una vez más en la coalición.

Por otro lado, muchos de los votantes musulmanes más conservadores (provenientes principalmente del movimiento de masas 212 que derrocó a Ahok y del Frente de Defensores Islámicos) que hasta ahora habían respaldado a Prabowo han expresado su decepción y le han retirado su apoyo. De ahora en adelante, la oposición de los partidos y organizaciones de masas islamistas, que sienten que sus demandas no han sido lo suficientemente atendidas por el actual gobierno o que se hallan sometidas a una regulación y represión crecientes (Hizbut Tahrir fue prohibido en 2017, mientras que al FPI se le ha denegado recientemente una extensión de su permiso como organización), bien podría radicalizarse. Algunas encuestas indican que alrededor del 13 por 100 de los musulmanes indonesios votaría al FPI si se presentara a las elecciones, al margen de los partidos islámicos existentes. En otras palabras, el electorado islamista es una fuerza apreciable.

¿Qué nos indica esto sobre el curso que Jokowi y su círculo planean seguir en 2020 y posteriormente? A Jokowi no parece importarle mucho la caída en picado de su popularidad (pasó por situaciones peores durante la crisis entre la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y la policía en 2015), sino que tiene la vista puesta en dos agendas principales: en primer lugar, el crecimiento económico (haciendo cada vez más hincapié en los sectores digital y de servicios) y el desarrollo de las

infraestructuras, con la perspectiva del enorme potencial que supondrá la construcción de una nueva capital en Kalimantan; y en segundo, la lucha contra el islam conservador y el terrorismo en la que se va dando cada vez más vía libre a la policía y a las fuerzas armadas. El crecimiento seguirá siendo lento y se seguirá distribuyendo de forma desigual y lo mismo sucederá con los programas de bienestar (el próximo año se duplicará la cuota mensual del seguro médico público, el BPJS, que lleva años perdiendo dinero).

La campaña de seguridad no solo significa el abandono de Yudhoyono, que incluía en su coalición a muchos musulmanes conservadores, algunos de los cuales ocupaban puestos clave en su gabinete. Una de las exigencias más fuertes de reforma tras la caída de Suharto era que se pusiera fin al *dwifungsi ABRI*, las «funciones duales» que se asignaba a los militares bajo su gobierno, donde los oficiales ocupaban puestos civiles. En 2004, la Ley 34 prohibió a los oficiales en activo involucrarse en la política partidista o asumir cargos civiles, excepto en los ministerios de asuntos políticos, jurídicos y de seguridad, defensa, inteligencia y narcóticos (aunque, por supuesto, ello no impidió que los generales retirados poblaran el panorama político). Sin embargo, en junio de 2019 Jokowi emitió un reglamento presidencial que revisaba aquella ley con el argumento de que había un número creciente de oficiales excedentes que ya no podían ser canalizados hacia posiciones de liderazgo en la Administración pública o en las empresas estatales, y que los militares eran la opción más conveniente para emplear en los proyectos de desarrollo, desde las infraestructuras hasta los planes agrícolas, todos ellos propensos a la apropiación de tierras. Además, el año pasado la policía nacional firmó un memorando de entendimiento con los militares que permite el despliegue de soldados durante protestas y huelgas, disturbios masivos, conflictos sociales, tareas de seguridad y, en general, en «situaciones que requieran asistencia militar». Así las cosas, el riesgo de que se establezcan paralelismos con el uso que hacía Suharto de los aparatos represivos del Estado para intervenir en la vida civil es evidente.

Después de seis años en el poder, Jokowi –presentado en 2014 como «The New Hope» [«La nueva esperanza»] en la portada de la revista *Time*– podría de hecho decirse que se asemeja a una versión tropical de Obama: uno y otro, presidentes *celebrity* que disfrutaban de una popularidad e índices de aprobación cuya repercusión en sus partidos y políticas es mínima; rodeados por los vestigios del régimen anterior; la misma

retórica insípida de elevación vacía; la misma torpeza moral; el mismo estilo tecnocrático, la misma fe en los mercados y desconfianza en la movilización; la misma connivencia con los grandes intereses económicos y las concesiones médicas a los pobres; la misma combinación de santurronería y violencia, drones en Yemen y fuerzas especiales en Papúa. Solo en su suerte con sus respectivos poderes legislativos han diferido realmente: Jokowi ha cooptado a sus oponentes sin dificultad para asegurarse una gran mayoría, Obama no logró ningún avance frente a una oposición republicana con más principios, dentro de su óptica, que Prabowo y el resto.

Así pues, no habrá de sorprender que esta trayectoria haya alienado a muchos en la izquierda –algunos de los cuales apoyaron a Jokowi en 2014 y unos pocos más, a regañadientes, en 2019–, donde la ira ante su indiferencia hacia los derechos humanos y el daño al medio ambiente está aumentando. La principal expresión de esta desafección ha sido un movimiento a favor del Golput (boicot electoral), pero este todavía no ha logrado ninguna recepción significativa entre las masas. En 2019 la participación electoral fue todo un récord, situándose por encima del 81 por 100, mientras que los votos nulos o en blanco apenas representaron el 2,38 por 100. Está por ver si esta situación cambiará en alguna medida con la gran coalición de Jokowi y Prabowo (a la que muchos en Golput se refieren con sorna como «vota a dos por el precio de uno»), y si calará entre la población la idea de la inutilidad de una votación en la que cualquier candidato reunirá lo peor de ambos campos.

Las protestas de septiembre tomaron a muchos por sorpresa, ya que provenían de ambos lados de regiones y divisorias políticas altamente polarizadas, mientras que las recientes protestas masivas –como el alboroto poselectoral de mayo de 2019 o la campaña 212 de diciembre de 2016 contra Ahok– han sido de naturaleza sectaria y religioso-conservadora. Aunque ha habido mucha resistencia por parte de los agricultores y otros sectores a las expropiaciones de tierras y a los abusos, esta ha tendido a ser localizada y pequeña en escala, sin mucha presencia de estudiantes, quienes a menudo han sido ridiculizados como *millennials* apolíticos: la larga historia de los movimientos estudiantiles indonesios es despachada en este siglo como una irrelevancia nostálgica. Muchos factores convergieron para provocar un descontento creciente, un fuerte e incipiente sentimiento de que algo no andaba bien en el país. El Parlamento estaba impulsando una serie de leyes polémicas

que iban a criminalizar una amplia gama de acciones ordinarias y que podían atrapar a todo el mundo: un lema popular era *semua bisa jadi korban* («cualquiera puede convertirse en víctima»). Existía también un creciente desdén hacia los propios diputados, a quienes los medios de comunicación sorprendían a menudo en flagrante ausencia de las sesiones plenarias (cuando no mirando pornografía o quedándose dormidos en el hemiciclo) y que, por otra parte, hacían gala de una desenfadada rapacidad y avaricia al exigir salarios aún más altos. Después vinieron el vaciamiento de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, la represión de los papúes, la propagación de los incendios forestales por las empresas y las brutalidades de la policía militar, todo ello en el corto espacio de los dos meses que precedieron al estallido de las protestas.

Hay que decir que, a pesar de la atmósfera ecuménica del levantamiento, no todos los que protestaron estuvieron de acuerdo con las siete demandas: la criminalización de las relaciones extramatrimoniales y homosexuales era apoyada por muchos de los participantes islámicos más conservadores. La polarización está creciendo en función de las diferencias religiosas y geoculturales en formas que recuerdan a algunas de las que existían en la Indonesia anterior a la década de 1960, mientras que el actual acoplamiento entre Jokowi y Prabowo en nombre de la «desradicalización» probablemente lleve a la izquierda y a la derecha en direcciones opuestas. Los activistas ya bromean con que el término (islam) «radical» se ha convertido en el nuevo comodín del alarmismo, ya que «comunista» y «anarquista» se han banalizado por el uso excesivo. ¿Qué efecto tendrán estos acontecimientos entre las generaciones más jóvenes? Puede que las protestas no marquen un distanciamiento decisivo con respecto a la cultura amnésica que describí en estas páginas hace tres años, pero sí parece que el «sotobosque de conciencia» que sugerí en aquel entonces ha repuntado<sup>4</sup>. El espectáculo de los estudiantes universitarios levantándose por toda Indonesia junto con sus camaradas más jóvenes de los institutos ha sido particularmente alentador. Lo que ocurrirá a largo plazo sigue siendo incierto, aunque solo sea porque los activistas y estudiantes indonesios están atrapados en una tensión entre seguir siendo «puros» o tratar de establecerse en un sistema político que, cada vez más, le está vetado a cualquiera que no cuente con un patrimonio exorbitante o el patrocinio de una oligarquía impermeable y corrupta.

---

<sup>4</sup>R. Kuddus, «Los fantasmas de 1965», *NLR* 104, cit., pp. 91-92.

# Clase, pueblo y nación

Nuevos bloques  
históricos antisistémicos  
en la crisis  
del Estado español

Carlos Prieto  
del Campo

BRUMARIA

“No es fácil de leer, pero el análisis sin complejos de Carlos Prieto del Campo sobre la formación social española en clave histórica para afrontar el significado y la operatividad política de nociones complejas como clase, pueblo y nación es extremadamente valioso”.

PABLO IGLESIAS

**Editorial:** BRUMARIA  
**Colección:** Logaritmo Amarillo, nº 14  
**Disponible:** [bit.ly/B\\_LA14](https://bit.ly/B_LA14)  
**PVP:** 13 €

El presente volumen indaga acerca de la cuestión nacional y el desmesurado espacio que ocupa en la coyuntura política española, hecho que refleja las dificultades encontradas a la hora de construir sujetos políticos fuertes capaces de medirse con la actual governance neoliberal mediante el diseño de proyectos de clase sofisticados y bien articulados.

En un horizonte de transformación radical de las relaciones de poder realmente existentes, el vaciamiento del contenido de clase de la política actual y las dificultades momentáneas a la hora de construir alternativas antisistémicas por las fuerzas del cambio desembocan sin remedio en el laberinto de las políticas de la identidad enunciadas en el lenguaje liberal de los derechos civiles. Entretanto, las duras estrategias de dominación neoliberal laminan las condiciones mínimas de garantía de los derechos fundamentales de amplias mayorías de las clases trabajadoras tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.